

# Los militares peruanos no se han arrepentido ni pedido perdón

Por Ricardo Alvarado

Anteponer los intereses de grupo a los intereses nacionales y los reglamentos castrenses al respeto por la Constitución: tales son los criterios usados por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Walter Ledesma y la chusma fujimorista para condenar anticipadamente a los hermanos Humala y sus hombres.

Este hecho es un claro indicador de la esencia antidemocrática de las Fuerzas Armadas: muchos se han ilusionado con los cambios en el mando y creen que nos encontramos ante un poder militar "institucionalista y democrático", sin percibir que antivalores como la "obediencia debida" y el "espíritu de cuerpo" se mantienen incólumes. Ni Hermoza, ni Malca, ni Saucedo, ni VillanuevaRuesta se encuentran presos o procesados por sedición, como merecerían; al contrario, mantienen su prepotencia, su cinismo, sus numerosos y bien pagados séquitos. "Un general no puede ir preso" parece ser la consigna de las "renovadas" Fuerzas Armadas.

¿Pero están en verdad renovadas? ¿No siguen siendo, EN ESENCIA, las mismas Fuerzas Armadas que planearon y ejecutaron la "guerra sucia" y el golpe del 5 de abril, que se humillaron ante Montesinos, que capitularon ver-

gonzosamente ante Ecuador, que se corrompieron hasta la médula con la miasma fujimorista? ¿Han pedido perdón al pueblo peruano por los muertos, los desaparecidos, los torturados, los injustamente encarcelados? ¿Han pedido perdón por su sumisión a Montesinos, por la corrupción de la que CASI TODOS fueron cómplices, por acción u omisión?

En vez de estos necesarios actos de contrición, cárcel para Humala: el mensaje de los actuales mandos "institucionalistas" es claro, y peligroso: nos advierte que estas Fuerzas Armadas no participan de los ideales democráticos (encarnados por Humala y sus hombres). Es más: nos advierte que los militares están dispuestos a castigar a los pocos de entre ellos que lucharon por la libertad y la democracia, mientras que los autores de aberrantes violaciones a los derechos humanos y de escandalosos actos de corrupción siguen libres, campantes y protegidos.

No habrá una auténtica democracia sin un poder militar esencialmente democrático, depurado de TODOS aquellos elementos vinculados a la "guerra sucia" y a la corrupción: de otro modo, estaremos frente a una "democracia tutelada", temerosa de disgustar a los militares. Y el pueblo peruano no ha luchado y sufrido en las calles para que el Perú se convierta en otro Chile post-Pinochet.

► Ricardo Alvarado (\*)

Marino Fernández, soldado peruano, ha muerto el pasado miércoles, a consecuencia de las brutales torturas que sus compañeros y superiores le infligieron en un cuartel de Junín. En los últimos años, decenas de soldados como él han sido torturados en cuarteles de todo el país; muchos han muerto, otros han quedado con secuelas físicas y psicológicas imborrables. Los responsables, en casi todos los casos, han quedado impunes.

Estos hechos (que no son «excesos

aislados» como algunos quisieran creer) demuestran el carácter brutal de la formación que reciben los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. El viejo estilo de

mandar y ser obedecido mediante garrotazos sigue vigente, complementado con brutales métodos de tortura provenientes, en muchos casos, de la infame «Escuela de las Américas» donde muchos de nuestros más altos oficiales se han «formado». Obedecer sin chistar, maltratar al débil y al indefenso, son los principios que aprenden nuestros militares,

## Fuerzas Armadas y Derechos Humanos

tanto los oficiales como la tropa. Barbarie pura, que se aplicó masivamente durante la «guerra sucia»: miles de torturados, desaparecidos y muertos lo comprobaban.

Un poder militar que aplica sistemáticamente la tortura como método de «aprendizaje» o castigo no garantiza la vigencia de la democracia ni de los dere-

chos fundamentales. Como consecuencia de la aplicación de la tortura, la moral castrense se corrompe y destruye, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en viles

«escuadrones de la muerte». Baste recordar que las atrocidades de Videla y compañía prepararon la derrota de Malvinas, y que las matanzas de Ayacucho facilitaron la capitulación de Tiwinza.

Urge, por lo tanto, democratizar nuestras Fuerzas Armadas. Poner a los civiles al mando: un ministro de Defensa civil sería un buen comienzo. Replan-

tear la formación castrense, poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos. Castigar severamente a los culpables de torturas y abusos. Eliminar absurdos privilegios de casta, como el fuero privativo. Y no olvidar que los militares son ciudadanos armados. No deben gozar de privilegios, pero tampoco deben ser tratados como ciudadanos de segunda. Si adquirimos conciencia de ello, algún día Marino Fernández podrá descansar en paz.

(\*) HISTORIADOR E INVESTIGADOR EN DERECHOS HUMANOS.

▷ Ricardo Alvarado (\*)

El macartismo visceral de algunos militaristas, para quienes todo lo que signifique la defensa de los derechos humanos es un atentado contra la «dignidad de las Fuerzas Armadas» (que, en honor a la verdad, no han ganado a nadie desde que el Perú es independiente) pretende dejar en el olvido los crímenes cometidos en más de 15 años de «guerra sucia». Algunos pretenden dejar en el olvido las horribles atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía durante la guerra antisubversiva, en nombre de una pretendida «reconciliación nacional»; otros soslayan la responsabilidad de dos gobiernos constitucionales en estos hechos, haciendo creer a la opinión pública que sólo se cometieron violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura de Fujimori, cuando la violencia política, con sus secuelas de muerte y horror, comenzó ya en 1980.

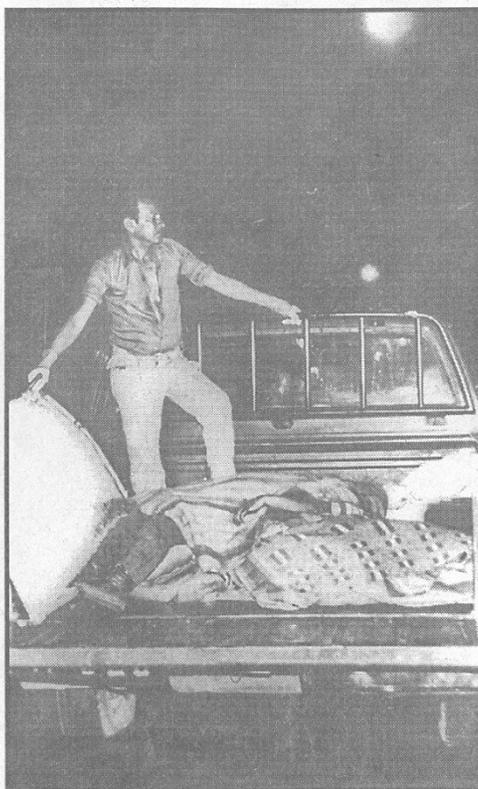
Antes de ir al punto, quisiera hacer una precisión. El término «guerra sucia» se aplica, en todas las naciones civilizadas de Latinoamérica, al uso de métodos terroristas (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas) durante una guerra antisubversiva. Es un término cabal, ya que describe a la perfección la monstruosidad que implica para la población civil el tener que sufrir crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas que deberían defenderlos de las amenazas y acciones subversivas.

Para muchos limeños, especialmente para las generaciones más jóvenes, la violencia política comenzó en Tarata. Suele ignorarse (o soslayarse) que ya desde 1980 Sendero Luminoso llevaba a cabo sus acciones criminales en la sierra ayacuchana, y que el MRTA actuaba ya desde 1984. También suele ocultarse que desde 1983, con la entrada de las Fuerzas Armadas en Ayacucho, se inició una espiral de violencia nunca antes vista.

Las Fuerzas Armadas, aplicaron métodos antisubversivos procedentes de «experiencias» represivas francesas y argentinas, así como de la criminal «Escuela de las Américas» considerando a toda la población como sospechosa de colaborar con los subversivos, y actuó con increíble brutalidad. Esta puede calificarse limpiamente como genocidio, puesto que se basó en la monstruosa premisa de considerar a los campesinos ayacuchanos como ciudadanos de «segunda clase», por prejuicios étnicos y sociales imperantes en las Fuerzas Armadas. Recordemos a «ideólogos» como el tristemente célebre general Cisneros Vizquerra, que opinaba que cualquier matanza de ayacuchanos podía justificarse si entre cada 100 muertos había 4 ó 5 senderistas.

El terror senderista fue respondido con el terror de Estado. La prensa no ingresó mayormente a las zonas de emergencia tras la matanza de Uchuraccay, y que los crímenes cometidos por militares y policías quedaron en el silencio, a diferencia de los cometidos por los terroristas. De los cerca de 25.000 muertos, sólo 2.000 fueron militares o subversivos

## Sobre la “guerra sucia”: para no olvidar



• Los crímenes cometidos en más de 15 años de “guerra sucia” no pueden quedar en el olvido.

vos: la gran mayoría fueron civiles, liquidados fríamente por los terroristas o por las fuerzas antisubversivas. Casi todos los 6.000 desaparecidos fueron detenidos por las Fuerzas Armadas o la Policía, de acuerdo con una reciente investigación de la Defensoría del Pueblo. Las zonas rurales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y otras provincias fueron arrasadas. Nombres como Accomarca, Pucayacu, Soccos o Cayara, localidades destruidas por la acción de las fuer-

zas antisubversivas, se unieron a los de Lucanamarca, símbolo perpetuo de la perversión senderista.

Durante la «guerra sucia», se hicieron tristemente célebres criminales como Telmo Hurtado o Álvaro Artaza, sólo comparables en su accionar y pensamiento a los más bárbaros criminales nazis, y protegidos sistemáticamente por sus instituciones. Recordemos que Hurtado defendió públicamente la matanza de niños (pues en su limitado y salvaje pensamiento, éstos ya estaban «adoctrinados»), y que el marino Artaza fue protegido en todo momento por su comando, que llegó incluso a organizar su autosequestro y aparente huida del país. El poder civil (dos gobiernos constitucionales) se limitó a observar pasivamente, cuando no a encubrir, semejantes monstruosidades. Recordemos al «demócrata» Fernando Belaúnde, jactándose públicamente de echar al excusado los informes de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos; o al infame Alan García, con su famosa frase «o se van ellos o me voy yo», aludiendo a los militares implicados en una matanza. Está de más decir que ninguno se fue.

Allá por 1989, esta situación comenzó a variar; no por acción de las Fuerzas Armadas, sino por la misma población, que comenzó a organizarse en Comités de Autodefensa Civil (CACD), para defender sus vidas y propiedades frente a la amenaza subversiva. Paralelamente, una actitud más permeable en las Fuerzas Armadas estableció una represión más selectiva; las matanzas por parte del Ejército disminuyeron sensiblemente, así como las desapariciones, y se brindó un limitado apoyo logístico a los CADC. De este modo, la población, después de años de destrucción y muerte, tenía opciones y podía comenzar a creer en el Estado.

Lo que ocurrió después es bastante más conocido; Sendero, jaqueado en Ayacucho, se desplazó a Lima y a la Selva central, donde actuó con mortífera eficacia hasta la caída del sanguinario Abimael Guzmán (triumfo de la Policía Nacional, logrado sin terror, torturas ni efusión de sangre). El hecho, sin embargo, fue atribuido al SIN, que comenzó a crecer hasta convertirse en el monstruo que todos conocemos y despreciamos. ¿Las víctimas del terrorismo? Se las indemnizó miserablemente. ¿Las víctimas de la «guerra sucia»? Bien, gracias.

Ahora que se anuncia una Comisión de la Verdad, esperemos que todos los criminales sean castigados. Así como se establecieron penas drásticas para los delincuentes senderistas y emerretistas, deben establecerse penas mayores para quienes, siendo agentes del Estado y estando encargados de velar por la población, ordenaron y ejecutaron crímenes de lesa humanidad; para quienes fueron los responsables políticos de estos hechos; y para quienes, debiendo haber investigado estas acciones, no lo hicieron. De otro modo, nuestra democracia, al basarse en la impunidad, estará desnaturalizada desde su origen.

(\*) Historiador e investigador en Derechos Humanos.

▀ Ricardo Alvarado

Las limitaciones de nuestro sistema legal, de nuestra memoria histórica y de nuestra concepción de la democracia se hacen evidentes al momento de juzgar a quienes alguna vez nos gobernaron.

Francisco Morales, ex dictador e introductor de la desaparición forzada de personas en nuestro país, es ahora institucionalista y demócrata; Fernando Belaúnde, que puso Ayacucho bajo la bota y las garras inmisericordes del genocida general Clemente Noel, es un adalid de la democracia; Alan García, responsable directo de las matanzas de El Frontón y Lurigancho, es una víctima inocente de la dictadura; Alberto Fujimori dedica sus ocios tokiotas a esperar, pacientemente, que el polvo levantado por los millones que robó oculte los crímenes cometidos por su escuadrón de la muerte particular, el grupo "Colina".

No debemos perder la memoria, ni la indignación frente al pasado, salvo que queramos vivirlo nuevamente. La infame Martha Chávez, con su cinismo y su soberbia frente a las nefandas acciones del SIN y Vladimiro Montesinos, no es más que la reencarnación de Enrique Melgar, verborrea pura al servicio de los genocidas de Cayara; y éste, a su vez, era el reflejo de aquel Luis Pércovich que afirmaba que los desaparecidos se habían enrolado en Sendero Luminoso.

Toda una tradición de impunidad, que ya dura 20 años, queda reflejada en estos personajes y en otros muchos como ellos, con diversos rostros; desde los abiertamente fascistas, como el general Cisneros y el cura Cipriani, hasta los miserablemente cobardes, como Gilberto Siura, para el cual el Ejército era un monstruo "más grande que Dios". En el medio, la insidiosa prédica de Rafael Rey y Lourdes Flores en favor de las leyes de amnistía y la "reconciliación nacional", que no es más que la paz de los cementerios.

Frente a toda esta infamia y podredumbre, son varias las generaciones que exigen cuentas. Están los familiares de las víctimas, que esperan noticias ciertas de sus seres queridos; están los escasos sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, que esperan una compensación por todo lo sufrido; están los hijos del terror, desarraigados, traumatizados, buscando afanosamente una respuesta en los pueblos jóvenes de Huamanga y Lima. Ni siquiera sabemos cuántos son; se estima, sí, que cerca de 200.000 ayacuchanos debieron huir de la violencia, pero no se sabe ni siquiera

## "Guerra sucia" y memoria histórica



FOTO: GUSTAVO HERRERA

• Rafael Rey defendió la impunidad de criminales. Hoy es un demócrata.

aproximadamente cuántos fueron detenidos, cuántos torturados, qué efectos sufrieron. No hay programas de salud corporal ni salud mental para las víctimas.

Ninguna instancia estatal, hasta ahora, ha hecho caso a sus reclamos. La investigación más importante sobre desaparecidos, publicada recientemente por la Defensoría del Pueblo, no es más que un análisis estadístico del archivo que dejó el Ministerio Público. Afirma que hubo 6.000 desaparecidos; que el Ejército, la Policía y la Marina se los llevaron; que el Ministerio Público, por lo general, no cumplió con investigar. Eso ya se sabía antes; los familiares de

las víctimas también lo sabían, a partir de su penosa experiencia cotidiana por juzgados y cuarteles.

¿En qué se ha avanzado? En nada, salvo en tener una evidencia "científica" de las desapariciones, en añadir una entrada más al vasto currículum del doctor Santistevan y en demostrar, ante la desinformada opinión pública y las financieras internacionales, la "profunda preocupación" de la Defensoría sobre los desaparecidos. Agua de malvas.

¿Repetirá este esquema la Comisión de la Verdad? Esperamos que no. No debe limitarse a constatar qué pasó; debe señalar culpables directos, cómplices, responsables políticos -desde los Presidentes de la República para abajo, y no al revés. Debe entrar a los archivos secretos y a los centros de detención clandestinos, donde no llegaron ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo. Debe señalar a quienes encubrieron matanzas, desapariciones, violaciones, saqueos. Debe señalar a quienes se enriquecieron con la destrucción de las zonas de emergencia, con las armas y pertrechos usados contra civiles indefensos.

La Comisión de la Verdad debe hacer públicos los resultados de sus investigaciones, sacando a la luz todas y cada una de las órdenes genocidas emitidas por los comandos militares y policiales, para que quede claramente establecida su responsabilidad e infamia. El Poder Judicial -depurado y protegido contra posibles amenazas- deberá castigar ejemplarmente a quienes sean hallados responsables, el Estado brindará reparación integral a las víctimas -asumiendo su responsabilidad por lo sucedido- y las Fuerzas Armadas y la Policía pedirán perdón al pueblo peruano por sus crímenes.

Pero es una responsabilidad mayor la que aguarda a la Comisión de la Verdad: la de reescribir la historia de dos décadas de violencia política. Debe quedar establecido que

los métodos usados contra la subversión fueron los peores entre todos los posibles. Que más de 20 mil peruanos perecieron por culpa de un terrorismo brutal, sí, pero también por culpa de la arcaica estructura del Estado peruano y sus Fuerzas Armadas, por su profundo y sempiterno racismo, por la brutalidad, el sadismo o la cobardía de buena parte de sus integrantes. Que el poder civil vivió sometido al poder militar, encubrió sus crímenes y creó una historia falseada, en la cual muchos hijos de desaparecidos deben, hasta ahora, aprender a olvidar a sus padres, como si nunca hubieran existido, como si nadie hubiera muerto.

# Procesar al gran demagogo

▷ Ricardo Alvarado

Merced a sus innegables dotes como polemista y a la mediocridad de sus adversarios, Alan García ha logrado remecer el escenario político peruano, presentándose como una víctima inocente de la tiranía fujimorista, con un discurso económico aparentemente actualizado y respondiendo con desenfado y habilidad a las acusaciones de corrupción vertidas por sus adversarios. Sin embargo, García -al igual que Fujimori- no ha respondido en ninguna de sus declaraciones a las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, como la recientemente descubierta masacre de Pachamarca, donde, a inicios de 1988, 30 campesinos fueron detenidos y asesinados por miembros del Ejército.

El gran demagogo pretende ahora volver al poder y vendernos la idea de un "Plan Perú", para combatir el tráfico de drogas. ¿Con qué autoridad moral habla? ¿Qué mago de Oz le ha conferido cualidades de estrategia y respeto por los derechos humanos? ¿Quién va a ejecutar el plan, Agustín Manti-lla? ¿García puede garantizarnos que no van a surgir paramilitares en las zonas de combate, que no habrá masacres ni desaparecidos? Y lo principal: ¿cuándo piensa responder por la "guerra sucia" llevada a cabo durante su gobierno?

¿No fue acaso durante el gobierno de García que se cometieron el 41,8% de los casos de desaparición forzada de personas, y que se cometieron matanzas como las de Acco-marca, Ucáyali, Chumbivilcas, Calabaza, Cayara, El Fron-

tón, Lurigancho, Pachamarca? ¿No fue él quien puso a las zonas de emergencia bajo la férula criminal de militronchos como Telmo Hurtado y José Valdivia?

¿No fue García quien permitió el surgimiento y acción del comando terrorista "Rodrigo Franco", padre putativo del "Grupo Colina"? ¿No fue bajo el gobierno de García que Vladimiro Montesinos organizó su red de corrupción y narcotráfico, fungió como asesor oficioso del fiscal de la Nación y encubrió a los asesinos de Cayara?

Alan García no está dispuesto a discutir acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Prefiere polemizar sobre corrupción, e incluso podría "ponerse a derecho", ya que las pruebas presentadas contra él no resultan incontestables y se prestan a polémicas, donde el ex presidente puede apelar a su hábil oratoria. Además, los delitos vinculados a la corrupción prescriben; el resto puede confiarse a la frágil memoria histórica de los peruanos y a la ineptitud de sus acusadores, que aseguran a García una impunidad casi perfecta.

Por el contrario, los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y el principio de jurisdicción universal establece que los responsables de violaciones a los derechos humanos pueden y deben ser perseguidos por todas las naciones civilizadas del mundo. Esto debería ser suficiente para llevar a García ante un tribunal y someterlo a proceso por sus acciones y omisiones, a no ser que los peruanos queramos oficializar la amnesia colectiva como parte de la cultura nacional, lo cual acarrearía irreparables consecuencias para la credibilidad y la estabilidad de nuestra democracia.

► Ricardo Alvarado

Hace algunos meses, expresé en las páginas de "Liberación" que una exigencia indispensable de la transición democrática era un acto de contrición y arrepentimiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, éstas no lo hicieron hasta que sus altos oficiales fueron sorprendidos en falta, firmando un vergonzoso documento de perruna lealtad y sumisión a su amo Montesinos.

Puestos en evidencia, los señores generales y almirantes debieron manifestar su arrepentimiento. Pero en vez de ello, nos contaron un patético cuento de hadas, que

podría resumirse así:

"Nosotros sufrimos en silencio durante todo el fujimorato, con el que nunca estuvimos de acuerdo. Montesinos y Fujimori nos amenazaban, nos insultaban, nos espiaban. Nos obligaban a hacer, decir y firmar cosas infames. Hemos torturado, encarcelado y matado a inocentes, aceptamos dinero sucio y toleramos que una dictadura infame nos pisoteara. Pero conservamos el alma limpia, porque lo hicimos bajo coacción y obedeciendo a nuestros jefes. Aceptamos con los brazos abiertos la Comisión de la Verdad, pero conste que somos inocentes, porque la culpa de la

## No los perdonamos

guerra sucia fue de cuatro comandantes borrachos".

Para los señores generales y almirantes, no existe responsabilidad colectiva de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia y la corrupción. Obvian el hecho de que el fujimorismo fue un régimen planificado por las Fuerzas Armadas, a través del denominado "Plan Verde", sobre el cual el Comando Conjunto no ha dicho ni una palabra. ¿Olvidan los militares que fueron ellos los que lanzaron la idea del "gobierno fuerte de 20-25 años"? ¿Olvidan los militares que la represión selectiva estilo "Co-

lina" fue planificada por ellos, lo mismo que la monstruosa privatización a precio huevo?

Los militares olvidan que, como institución, le deben al Perú explicaciones por lo sucedido en los últimos 30 años. La dictadura de 1968-1980 fue un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, con un manejo económico y social desastroso. Al finalizar dicho régimen, no hubo ningún arrepentimiento: por el contrario, generalotes como Richter Prada, Cisneros Vizqueira y otros ideólogos de la guerra sucia siguieron al mando.

Los militares no han pedido perdón por los crímenes de Noel, de Valdivia, de Hurtado,

de Artaza. Tampoco por los 15 años de guerra sucia, tolerada y fomentada por los "demócratas" Belaúnde y García, y por el tirano Fujimori; por los miles de muertos, desaparecidos y torturados. Tampoco han pedido perdón a los cientos de inocentes que han sufrido y sufren injustas condenas de prisión, dictadas por tribunales castrenses. Y mucho menos han pedido perdón a los cientos de peruanos mutilados y traumatizados en una guerra perdida de antemano por la corrupción y cobardía de los altos mandos.

Hasta entonces, los peruanos debemos decir: no, señores militares, no los perdonamos.

# DECIRES

► César Hildebrandt

## A la opinión pública

**L**a Asociación “Militronchos Ascendidos Fraudulenta, Inmerecida y Arbitrariamente” (M.A.F.I.A.) denuncia ante la opinión pública y el país el ultraje sistemático del que vienen siendo víctimas nuestras gloriosas, impolutas, invictas, todopoderosas, espartanas y honestas Fuerzas Armadas por parte del conocido periódico comunista [sic] “Liberación”, el cual viene montando una campaña psicosocial plena de mentiras, calumnias y actos criminales, tales como:

1. Incitar al suicidio a más de 10 mil peruanos entre 1980 y 1996, con el objeto de atribuir dichas

muerdes a nuestras Fuerzas Armadas.

2. Incitar, durante los mismos años, a cerca de 6 mil personas a autosecuestrarse, con el fin de hacerse pasar como “desaparecidos” para calumniar falsamente [sic] a nuestras Fuerzas Armadas.

3. Formar escuadrones paraciviles -porque los paramilitares nunca han existido, no existen ni volverán a existir en nuestro país- llamados “Rodrigo Franco” y “Colina”, con el propósito de incriminar falsamente a nuestras Fuerzas Armadas en violaciones a los llamados derechos humanos [sic].

4. Haber ocultado durante más de 10 años la nacionalidad japonesa de un tal Alberto Fujimori a nuestros eficientísimos servicios de inteligencia, a fin de implicarlos en los actos cometidos por este señor.

5. Haber robado más de 500 millones de dólares USA, depositándolos en cuentas pertenecientes a altos jefes militares, a fin de incriminarlos en actos de corrupción.

6. Haber fabricado cerca de mil videocintas en los cuales civiles disfrazados de generales y almirantes fingen besar los callosos pies de un tal Vladimiro Montesinos.

7. Declarar falsamente que nuestras omnipotentes Fuerzas Armadas -apoyadas por los invencibles MIG-29 adquiridos a Bielorrusia en forma lícita y honesta- nunca llegaron a Tiwinza.

8. Negar la condición de héroes nacionales a los siguientes oficiales, autores de hazañas dignas de ser cantadas por Homero:

- Clemente Noel
- Telmo Hurtado
- Álvaro Artaza
- Martín Rivas
- Nicolás Hermoza
- Víctor Malca
- Víctor Medina

y muchos otros que arriesgaron permanentemente su vida y sus bienes por nuestro amado Perú.

9. Deducir falsamente de toda esta serie de patrañas que nuestras Fuerzas Armadas son venales, corruptas, voraces, dañinas, abusivas, arbitrarias, genocidas, y pretender por ello su abolición, como si no se hubieran cubierto de gloria en Soccus, Huancasancos, Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, La Cantuta y Tiwinza.

Anunciamos que recurriremos en busca de amparo al Consejo Supremo de Justicia Militar, donde bizarros oficiales de caballería se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades y castigos.

El Estado Mayor de M.A.F.I.A.

Pentagonito, 06 de julio del 2001. ■

## **Aclaración necesaria**

Estimado señor Hildebrandt:

En la lista de interés Ave Crítica nos hallamos muy apesadumbrados por el hecho de que Ud. haya firmado como suyo el artículo "Grave denuncia contra 'Liberación'", publicado en su columna "Decires" el sábado 07 del presente.

Lo que pretendía ser un homenaje – un poco cómico– a su labor democrática y una denuncia contra el militarismo, pasó –esperamos que por un imperdonable error tipográfico– a ser, de este modo, creación suya.

Sin embargo, como de buena fe confiamos en que esta paternidad atribuida ha sido un lamentable error, esperamos de usted una pronta y saludable rectificación.

Atentamente,

RICARDO ALVARADO  
DIRECTOR DE "AVE CRÍTICA"

**Nota del Director.-** En efecto, hubo una apropiación compulsiva de tan divertido texto. Los quehaceres febriles de los días siguientes me impidieron aclarar la autoría del escrito. Muchas gracias por recordármelo.